

PANORÁMICA REGIONAL: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Susan Spronk

Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder.

Eduardo Galeano, escritor y activista uruguayo (1973, 12)

Los ciudadanos y ciudadanas de América Latina y el Caribe (ALC) se enfrentan a dos importantes desafíos en la lucha para cubrir las necesidades de sus comunidades. En primer lugar, la región en su conjunto exhibe la más aguda desigualdad en la distribución de los ingresos del mundo y la concentración extrema de los recursos y del poder produce situaciones de profunda y extendida pobreza. En segundo lugar, durante los años ochenta, los servicios públicos de la región fueron los que se privatizaron más rápidamente a escala mundial. Desde entonces, sin embargo, las luchas de los movimientos sociales han conseguido devolver servicios básicos a manos públicas, especialmente en los sectores del agua y la electricidad en países gobernados por 'la nueva izquierda', como Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela.

Aunque África, Asia y la región de ALC comparten una historia común de colonialismo, ésta última se distingue del resto por su pronta independencia y por su larga historia de revoluciones y luchas sociales. Las Américas fueron testigo del desarrollo de civilizaciones indígenas avanzadas, como los mayas, los aztecas y los incas. Las islas que ahora conforman Cuba fueron invadidas por exploradores españoles en 1492, mientras que exploradores portugueses desembarcaron en la costa este del Brasil actual en torno a 1500. Debido a la colonización europea, a fines del siglo XVI sólo quedaba en el continente en torno al 10 por ciento de la población originaria (Galeano 1973). A causa de la falta de brazos para trabajar en las plantaciones que poblaban las islas caribeñas y las zonas costeras de América del Sur, se calcula que entre el siglo XV y XVII 'se importaron' a la región unos cinco millones de esclavos procedentes de África (Curtin, 1969), hecho que explica su herencia 'racial' mixta.

El legado de la exclusión racista y clasista engendrada por el colonialismo propició una constante ebullición política en los siglos XIX y XX. La primera revuelta de esclavos triunfante desembocó en el establecimiento de la República de Haití en 1804. El resto de América Latina y el Caribe consiguió la independencia

entre 1810 y 1825 (excepto Cuba, que siguió siendo una colonia norteamericana hasta 1898, y Puerto Rico, que es hasta la fecha un protectorado estadounidense). Aunque los primeros dirigentes a favor de la independencia se inspiraron en las ideas liberales de la revolución francesa, las repúblicas de nuevo cuño siguieron siendo sociedades muy segregadas y con rígidas jerarquías sociales, basadas en las castas y en la explotación de la mano de obra indígena y negra, lo cual llevó a más sacudidas y revoluciones sociales. La primera revolución moderna de las Américas se produjo en México en 1910, seguida por la revolución nacional-popular de Bolivia en 1952, la revolución cubana en 1959 y la revolución sandinista de Nicaragua en 1979.

Las décadas centrales del siglo XX se caracterizaron por un proyecto de desarrollo encabezado por el Estado e inspirado por un grupo de analistas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL), conocido como 'industrialización por sustitución de importaciones' (ISI), con la que los Estados buscaban 'modernizar' sus economías para superar el legado de dependencia y subdesarrollo (Cardoso y Faletto 1979). Con las políticas de la ISI, los Gobiernos nacionales centralizaron cada vez más su control sobre servicios básicos como el agua, la electricidad y la atención de la salud. La expansión del sector público fue apoyada por decisiones de gobiernos e instituciones internacionales que asumían que se necesitaba una decidida intervención gubernamental en la economía para maximizar el bienestar social mediante el crecimiento económico. En sintonía con el pensamiento keynesiano que imperaba en la época, las infraestructuras y el suministro de servicios básicos se veían como elementos fundamentales para mantener la acumulación del capital, contribuir a la reproducción de la mano de obra y ayudar a preservar el consenso entre clases. La presión política ejercida por las organizaciones de las clases trabajadoras sobre el Estado forzó a éste a gastar más en necesidades básicas, lo cual se tradujo en mejoras en la calidad de vida de la población trabajadora (Weisbrot et al 2002).

A pesar de estos logros, la estrategia de desarrollo dirigido por el Estado generó resultados desiguales. En primer lugar, las políticas de la ISI no pudieron superar la enquistada desigualdad entre razas y clases que ha predominado en la región de ALC desde la época colonial (Thorp 1998). En segundo lugar, la ISI fomentó una urbanización acelerada y caótica, y un desarrollo irregular: en 1980, el 65 por ciento de la población vivía en zonas urbanas, mientras que los trabajadores rurales asumían la carga de producir alimentos baratos para los trabajadores urbanos pero sin gozar del mismo acceso a servicios básicos (Lefebvre 1980). Este desfase en el suministro de servicios continúa en la actualidad, especialmente en las zonas periurbanas y rurales de la región.

Los legados más significativos de la ISI han sido el autoritarismo y la deuda externa. La etapa 'fácil' de crecimiento se había agotado ya a fines de los años cincuenta. Consecuencia de ello fue un ciclo de violencia patrocinada por el Estado contra la población civil. El primer golpe militar tuvo lugar en Brasil en 1964

y, a fines de la década siguiente, 18 de los 21 países latinoamericanos estaban controlados por gobiernos no constitucionales. Los gobiernos autoritarios, que no rendían cuentas a su población y contaban con el apoyo del imperialismo estadounidense, contrajeron grandes sumas de deuda externa de fuentes de capital públicas y privadas, que después dejaron a sus países a merced de las instituciones financieras internacionales (McMichael 2008).

Aplicadas en un primer momento *manu militari* tras el golpe pinochetista en Chile en 1972, las políticas neoliberales desplegadas en los años ochenta y noventa influyeron profundamente en las relaciones políticas y económicas en la región de ALC y acabaron con muchos de los logros de la era anterior. Los mercados se abrieron al capital internacional privado, los mercados de tierras se liberalizaron, las empresas estatales se privatizaron y los subsidios sociales de servicios y alimentos básicos se recortaron de forma espectacular. Los índices de pobreza se exacerbaban entre 1980 y 1990, pasando del 40,5 por ciento al 48,3 por ciento. El problema de la pobreza se agravó de forma más pronunciada en las zonas rurales; en 2005, la pobreza rural era del 58,8 por ciento, frente al 34,1 por ciento en las zonas urbanas (ECLAC 2008, 52).

Debido a su relativa riqueza y su alta población urbanizada, la región de ALC ha presentado tradicionalmente un mejor índice de acceso a servicios de agua y saneamiento que Asia y África. En 2008, sólo el 9 por ciento de la población carecía de servicios de agua, y el 21 por ciento no disponía de acceso a saneamiento (WHO y UNICEF 2000). Sin embargo, es precisamente por este motivo por el que la región era especialmente atractiva para las empresas privadas, las que inundaron el continente bajo los auspicios de las políticas de privatización fomentadas por el Banco Mundial. No obstante, tras varios episodios de devaluaciones monetarias y movilizaciones sociales, los ‘contratos estrella’ de privatización en Buenos Aires (Argentina) y La Paz-El Alto (Bolivia) fueron rescindidos, devolviendo el agua al control público y abriendo espacios para el debate sobre alternativas reales.

La oleada de privatizaciones en el sector eléctrico, siguiendo un modelo parecido al del agua, comenzó en Chile a principios de los años ochenta. No obstante, las compañías de generación y distribución que se privatizaron en los años noventa pronto dejaron de ser rentables, lo cual llevó a una reestructuración del sector en la década siguiente. Debido al declive de la rentabilidad, la ofensiva privatizadora ha ido decayendo en los últimos años, seguida por una tendencia hacia la renacionalización en países como Venezuela y Bolivia. Incluso en Colombia, donde la privatización tuvo una incursión más profunda, más de la mitad de los grupos empresariales del sector eléctrico permanecen en manos públicas (Hall 2007).

En lo que respecta a la atención de la salud, el modelo de la ISI permitió la creación de sistemas incompletos de bienestar en los años sesenta y setenta, que promovieron el establecimiento de instituciones de seguro social y atención médica que sólo cubrían a los trabajadores del sector formal. Este

sistema excluía a la mayoría de la población de muchos países ocupada en actividades informales, tanto en áreas urbanas como rurales (Fleury et al 2000). Cuba y Costa Rica, dos países con acceso universal a los servicios de salud, eran la excepción. Con las políticas de ajuste estructural de los años ochenta y noventa, la mayoría de los países adoptó medidas para limitar el gasto social, especialmente en salud y educación, fomentando a la vez el crecimiento del sector privado. De esta forma, se fueron canalizando cada vez más fondos al sector privado mediante medidas como la introducción de programas de seguro médico de prepago y la subrogación.

En resumen, el debate sobre alternativas en el ámbito de los servicios básicos en América Latina y el Caribe se debe entender en el contexto de la historia de colonialismo, autoritarismo y formas excluyentes de desarrollo capitalista en la región. Las duras luchas y las victorias de los movimientos sociales que volvieron a situar a la región en la órbita constitucional en los años ochenta y noventa también han influido de forma significativa en los debates sobre alternativas. Entre algunos sectores de los movimientos sociales prevalece la desconfianza hacia las instituciones estatales, lo cual indica la necesidad de prestar particular atención a los debates en curso en la región sobre la democracia, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. A pesar de ser una región muy urbanizada, el resurgimiento de movimientos sociales indígenas también ha introducido en la agenda política la cuestión de las alternativas no estatales.

Agradecimientos

Gracias a Luis Ortiz Hernández, Daniel Chavez, Iliana Camacho Cuapio, Catalina Eibenschutz Hartman y Silvia Tamez González por sus comentarios sobre este texto.

Referencias

- Cardoso, F.H y E. Faletto. 1979. *Dependency and development in Latin America*. Berkeley: University of California Press.
- Curtin, P.D. 1969. *The Atlantic Slave Trade*. Madison: The University of Wisconsin Press.
- ECLAC. 2008. *Social Panorama of Latin America 2007*. Santiago, Chile: Economic United Nations Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
- Fleury, S., S. Belmartino y E. Baris (eds). 2000. *Reshaping Health Care in Latin America: A Comparative Analysis of Health Care Reform in Argentina, Brazil and Mexico*. Ottawa: International Development Research Centre (IDRC).
- Galeano, E.H. 1973. *Open veins of Latin America; five centuries of the pillage of a continent*. Nueva York: Monthly Review Press.
- Hall, D.. 2007. "Electricity companies in Latin America 2007". Londres: Public Services International Research Unit (PSIRU).

- Lefebvre, L. 1980. "Spatial population distribution: urban and rural development", en L. Lefebvre y L. North (eds) *Democracy and development in Latin America*. Toronto: CERLAC-LARU.
- McMichael, P. 2008. *Development and social change: a global perspective*. Los Angeles: Pine Forge Press.
- Thorp, R. 1998. *Progress, poverty and exclusion: an economic history of Latin America in the 20th century*. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank (IAD).
- Weisbrot, M., D. Baker, E. Kraev, y J. Chen. 2002. "The scorecard on globalization 1980-2000: Its consequences for economic and social well-being", *International Journal of Health Services* 32 (2):229-253.
- WHO y UNICEF. 2000. *Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000 Report*. Ginebra: World Health Organization (WHO) y United Nations Children's Fund (UNICEF).